

**Paulo Ramón Suárez Xavier**

**Ana María Vicario Pérez**

**DIRECTORES**

**Mar Jimeno Bulnes**

**PRÓLOGO**

# **COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL Y PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA**

**RETOS PENDIENTES Y NUEVOS  
DESAFÍOS ANTE LA TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL DEL PROCESO**



**JIB**  
**BOSCH PROCESAL**

Paulo Ramón Suárez Xavier  
Ana María Vicario Pérez  
DIRECTORES

# COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL Y PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA

RETOS PENDIENTES Y NUEVOS  
DESAFÍOS ANTE LA TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL DEL PROCESO

Mar Jimeno Bulnes  
PRÓLOGO

Barcelona  
2023

  
BOSCH EDITOR



**CAJI**  
Cooperación Judicial Civil y Penal  
en el Ámbito de la Unión Europea  
Instrumentos Procesales  
Avances



La presente obra se inserta en el ámbito del proyecto "El Derecho Procesal civil y penal desde la perspectiva de la Unión Europea: la consolidación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia" PID2021-124027NB-I00 – Agencia Estatal de Investigación, cuya investigadora principal es la Dra. Mar Jimeno Bulnes.

Esta obra se publica con fondos resultantes de las Ayudas a la Recualificación del Sistema Universitario Español 2022, en la Modalidad Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores, concedida a Paulo Ramón Suárez Xavier.



UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA



UNIVERSIDAD  
DE BURGOS



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

© SEPTIEMBRE 2023 PAULO RAMÓN SUÁREZ XAVIER  
ANA MARÍA VICARIO PÉREZ  
(Directores)

© SEPTIEMBRE 2023

**JTB** BOSCH  
EDITOR

**Librería Bosch, S.L.**  
<http://www.jmboscheditor.com>  
<http://www.libreriabosch.com>  
E-mail: [editorial@jmboscheditor.com](mailto:editorial@jmboscheditor.com)

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra ([www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com); 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN papel: 978-84-19580-90-0  
ISBN digital: 978-84-19580-91-7  
D.L.: B 16385-2023

**Diseño portada y maquetación:** CRISTINA PAYÁ  +34 672 661 611

Printed in Spain – Impreso en España

## ÍNDICE

PRESENTACIÓN. PAULO RAMÓN SUÁREZ XAVIER, ANA MARÍA VICARIO PÉREZ.....	17
PRÓLOGO. MAR JIMENO BULNES .....	21

### **PARTE I. RETOS PENDIENTES DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL Y PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA**

TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU E COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA CIVIL – REVISITAÇÃO E LEITURA JURISPRUDENCIAL. LURDES VARREGOSO MESQUITA.....	29
1. Introducción .....	30
2. Título Executivo Europeu como concretização da cooperação judiciária civil no espaço europeu.....	31
2.1. Enquadramento do título executivo europeu nos princípios da cooperação judiciária civil .....	31
2.2. Noção, efeitos e pressupostos da certificação do título executivo europeu .....	33
2.2.1. Incontestabilidade do crédito .....	36
2.2.2. Cumprimento dos «mínimos processuais» ou «garantias mínimas».....	38

a)	Condições mínimas da citação ou notificação .....	39
b)	Garantias mínimas relativas aos mecanismos de revisão .....	41
3.	Meios de reação do devedor à certificação do título executivo europeu .....	43
3.1.	(Ir)Recorribilidade da decisão de certificação como título executivo europeu .....	43
3.2.	Procedimentos de rectificação e revogação da certidão de título executivo europeu.....	44
a)	Rectificação da certidão de título executivo europeu.....	45
b)	Revogação da certidão de título executivo europeu.....	45
4.	Considerações sobre a aplicação doméstica do título executivo europeu .....	47
4.1.	Procedimento de certificação do título executivo europeu .....	47
4.2.	Execução do título executivo europeu .....	48
4.2.1.	Oposição em sede de acção executiva.....	49
4.2.2.	Fundamentos de oposição à execução no ordenamento português.....	50
4.2.3.	Suspensão ou limitação da execução.....	51
5.	Nota final.....	54
6.	Bibliografía.....	54

	LA POLITICA DELL'UNIONE EUROPEA IN TEMA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. SERENA CACCIATORE .....	57
1.	Introduzione.....	58
2.	Contesto storico e Accordo di Schengen (1985) .....	61

2.1. Trattato di Maastricht (1992).....	65
2.2. Trattato di Amsterdam (1997) .....	67
2.3. Trattato di Lisbona (2007).....	70
3. Caratteristiche ed evoluzione del crimine organizzato .....	75
3.1. La cooperazione giudiziaria in materia penale.....	77
4. Osservazioni conclusive .....	80
5. Bibliografía.....	81
INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN JUDICIAL EN LOS DELITOS EN LOS QUE INTERVENGAN CRIPTOMONEDAS FRANCESC ORDÓÑEZ PONZ .....	87
1. Punto de partida de la cuestión .....	88
2. De la <i>cadena de bloques</i> a los <i>criptactivos</i> : funcionamiento y problemática.....	93
2.1. Los proveedores de servicio de criptomonedas como herramienta para combatir el anonimato de las tran- sacciones criptográficas delictivas .....	100
2.2. Los registros de los proveedores de servicios del Re- glamento MiCA.....	105
3. Mecanismos de cooperación entre estados miembro de la ue en delitos donde aparezcan activos virtuales .....	109
3.1. La Orden Europea de Investigación.....	110
3.2. Las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas en el orden penal. La propuesta de reglamento E-evidence .....	115
4. Medidas de investigación para combatir delitos donde in- tervengan monedas virtuales .....	119
5. A modo de reflexión .....	131
6. Bibliografía.....	132

**PARTE II. DESAFÍOS EN LAS INVESTIGACIONES ACOMETIDAS  
POR LA FISCALÍA EUROPEA**

LO STRUMENTO INVESTIGATIVO DELLE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA NELLE INDAGINI DELLA PROCURA EUROPEA. COSTANZA DE CARO.....	139
1. Introduzione: nuovi e vecchi scenari nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia .....	140
2. Operazioni <i>undercover</i> nelle indagini dell'eppo? .....	146
3. Il principio di proporzionalità tra prescrizioni processuali e diritto ad un equo processo .....	150
4. Le criticità del sistema di indagini transfrontaliere.....	159
4.1. <i>Undercover operations</i> e cross-border cases .....	161
5. Conclusioni .....	167
6. Bibliografia .....	168
LA RELEVANTE FIGURA DEL MINISTERIO FISCAL EUROPEO EN MATERIA DE JUSTICIA AMBIENTAL: ANÁLISIS DE LA RECIENTE OPINIÓN Nº 17 DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FISCALES EUROPEOS. NEREA YUGUEROS PRIETO ..	173
1. Introducción. El papel del Ministerio Fiscal como garante del medio ambiente.....	174
2. La postura del Ministerio Fiscal Nacional en materia de medioambiente.....	176
3. La figura del Ministerio Fiscal Europeo en materia de jus- ticia ambiental.....	181
3.1. Configuración del Marco de Cooperación Suprana- cional.....	185
3.1.1. Recomendación (2000)19: vestigio de la figura del Ministerio Fiscal Europeo .....	185
3.1.2. EUROJUST: cooperación judicial entre los Es- tados Miembros .....	187

3.1.3. Siguiente paso: el Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un fiscal europeo .....	189
3.1.4. Y llegó el día: Reglamento (UE) 2017/1939 por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la fiscalía europea.....	191
3.1.5. Su materialización en el Ordenamiento Jurídico Español: la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la fiscalía europea.....	192
3.2. La opinión nº 17 del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, relativa al rol de los Fiscales en la Protección del Medio Ambiente de 4 de octubre de 2022 ...	194
3.2.1. El fiscal como protector penal del medio ambiente .....	197
3.2.2. El fiscal como protector no penal del medio ambiente.....	199
3.3. La necesaria cooperación entre el ámbito nacional e internacional como clave de éxito.....	200
4. Reflexión final .....	202
5. Bibliografía.....	203
 LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES EN EL ALECRIM 2020 Y SU POSIBLE USO EN PROCESOS PENALES EUROPEOS. JUAN A. MURIEL DIÉGUEZ .....	205
1. Introducción .....	205
2. Vigilancia físicas .....	207
3. Vigilancia sistemáticas .....	209



## ÍNDICE

4.	Requisitos.....	211
5.	Autorización judicial.....	211
6.	Contenido de la solicitud.....	213
7.	Duración.....	214
8.	Utilización posterior de las grabaciones.....	215
9.	Personas a las que debe notificarse la medida.....	216
10.	Cancelación de datos.....	218
11.	Utilización de las grabaciones obtenidas por medios técnicos de videovigilancia.....	219
12.	Destrucción de las grabaciones.....	221
13.	La prueba transfronteriza/ prueba electrónica.....	222
	13.1. Cuestiones Generales.....	222
	13.2. Orden Europea de Investigación (OEI).....	224
14.	Conclusiones.....	227
15.	Bibliografía.....	229

### **PARTE III. INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SISTEMAS INTELIGENTES Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL: UNA MIRADA DESDE LA UE**

COOPERACIÓN JUDICIAL DIGITAL EN LA UNIÓN EUROPEA. e-CODEX COMO SISTEMA DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO DE DATOS PROCESALES. ANA MARÍA VICARIO PÉREZ.....		233
1.	Introducción.....	234
2.	La cooperación judicial en la Unión Europea. En busca de la digitalización de la cooperación informativa.....	236
	2.1. De Maastricht a la Unión Europea digital.....	236
	2.2. El proyecto e-CODEX como sistema de transmisión electrónica de datos procesales.....	240

2.3. Los datos procesales como bien público. Requisitos de calidad del dato.....	243
3. Características del sistema e-CODEX a la luz del Reglamento (UE) 2022/850 .....	245
3.1. Objetivos.....	245
3.2. Ámbito de aplicación.....	247
4. Gestión del intercambio de datos procesales a través de e-CODEX.....	252
5. Especial referencia a e-CODEX como herramienta de transmisión de pruebas transfronterizas .....	256
6. El uso de e-CODEX y la protección de datos personales. La Agencia ue-LISA como responsable del tratamiento.....	259
7. A modo de reflexión final .....	262
8. Bibliografía.....	263
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COOPERAÇÃO JUDICIAL E ADVOCACIA: UM OLHAR A PARTIR DO ORDENAMENTO EUROPEU. PAULO RAMÓN SUÁREZ XAVIER .....	267
1. Introdução .....	268
2. Algoritmização e mudanças sociais.....	269
3. Sistemas baseados em AI: sobre a sua implementação e algumas notas distintivas .....	274
4. Sobre a Carta Europeia para o uso da Inteligência Artificial em Sistemas Judiciais.....	281
5. Inteligência Artificial na justiça: perspectiva de regulação espanhola.....	284
6. Mediação, justiça baseada em dados e retos para os ADR..	290
7. À guisa de conclusões .....	296
8. Bibliografia .....	298

ALGORITMO, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DIRECTIVA EUROPEA EN MATERIA DE DERECHO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN: UN BINOMIO COMPLEMENTARIO. RODRIGO MIGUEL BARRIO.....	301
1. Introducción .....	302
2. El derecho a interpretación y a traducción .....	305
3. Marco teórico de la directiva relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.....	311
3.1. Un primer acercamiento a la Directiva 2010/64/CE.	312
3.2. La directiva relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales .....	320
4. Las tecnologías disruptivas en la Directiva 2010/64/UE. Propuesta de una automatización complementaria.....	335
4.1. La utilización de la IA para una traducción inmediata.....	336
4.2. La utilización de la IA para una interpretación inmediata.....	341
4.3. Ventajas y desventajas de las tecnologías disruptivas aplicadas a la Directiva .....	343
5. A modo de reflexión final .....	346
6. Referencias bibliográficas .....	347
LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS PARA LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN EL CRECIENTE DERECHO MEDIOAMBIENTAL. ESTER RENEDO SANTAMARÍA .....	351
1. La cooperación judicial en materia penal como sistema para el reconocimiento mutuo de sentencias.....	352
1.1. El derecho penal medioambiental: regulación de los derechos de tercera generación .....	353
1.2. El «hipotético» derecho penal internacional medioambiental, ¿cuáles podrían ser los delitos tipificados? .....	356

2.	La intervención de la Inteligencia Artificial en los procesos penales internacionales como sistema de homogeneización .....	364
2.1.	La intervención de la Inteligencia Artificial como tecnología disruptiva en los procesos medioambientales .....	369
2.2.	La toma de decisiones automatizadas a través de la Inteligencia Artificial por la Administración de Justicia y la revolución que supone.....	373
3.	La transformación digital de la administración de justicia y la reutilización de datos en las sentencias.....	375
4.	Conclusiones .....	378
5.	Bibliografía.....	379

# LA POLITICA DELL'UNIONE EUROPEA IN TEMA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

---

SERENA CACCIATORE

Doctora en Derecho y Dottore di Ricerca  
Investigadora Postdoctoral en la Universidad de Burgos

---

**RESUMEN:** Il tema del contrasto alla criminalità organizzata nell'Unione Europea rappresenta un'occasione di riflessione e di approfondimento per le implicazioni sugli ordinamenti interni di ogni Stato membro. In questo Capitolo, attraverso un excursus storico, esamineremo la politica di contrasto alla criminalità organizzata che deriva dalla messa in campo di tradizioni politiche nazionali diverse. Già l'articolo 29 del Trattato sull'Unione Europea indicava, tra gli obiettivi, quello di «fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza (...) sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale». Il percorso evolutivo mostrerà che la cooperazione tra gli Stati membri coincide con la volontà degli stessi di combattere la criminalità organizzata: come unica forma di contrasto utile al fine perseguito.

**PALABRAS CLAVE:** cooperazione giudiziaria penale, Unione Europea, criminalità organizzata, Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia.

## 1. INTRODUZIONE

La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (di seguito SLSG)<sup>1</sup> deriva dalla necessità di istituire uno «spazio» sicuro<sup>2</sup>, in cui la libera circolazione delle persone, le misure per la prevenzione e la lotta alla criminalità costituiscono il proposito principale dell'Unione Europea (di seguito UE)<sup>3</sup> come definiti all'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea (di seguito TUE)<sup>4</sup>. Nello specifico, il secondo comma stabilisce che: «L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima»<sup>5</sup>. Questo articolo mira

- 1 Al rispetto, v. GUITIÉRREZ CASTILLO, V., y LÓPEZ J., M., (eds.), *El desarrollo y consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea*, Tecnos, Madrid, 2016.
- 2 Relativamente alla tematica, REMOTTI CARBONELL, J. C., «El proceso de formación del Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. La lucha contra la delincuencia, cooperación policial y judicial y garantías del debido proceso en el ámbito penal» in FREIXES, T. (coord.), *Garantías del Proceso Debido y Unión Europea*, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2020, pp. 21-66, in particolare p. 23.
- 3 FAGGIANI, V., «Le direttive sui diritti processuali verso un «modello europeo di giustizia penale»?», *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 1, 2017, pp. 84-103, v. p. 85. In questi termini, KOSTORIS, R. E., «Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno», *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2015, pp. 1177-1204.
- 4 V. sito web ufficiale del Parlamento italiano; è possibile visionare le principali attività svolte dallo stesso, disponibile in <https://leg16.camera.it/561?appro=839> (Ultimo accesso: 24 marzo 2023).
- 5 GUILD, E., CARRERA S., EGGENSCHWILER A. (eds.), *The area of freedom, security and justice ten years on successes and future challenges under the stockholm programme*, Centre for european policy studies Brussels, Brussels,

a specificare gli obiettivi prefissati dall'UE, conferendo priorità alla creazione di uno SLSC, obiettivo menzionato ancor prima della creazione del mercato interno<sup>6</sup>.

La nuova realtà sociale, derivata dalla costruzione di uno spazio senza frontiere, fece emergere l'inadeguatezza degli strumenti tradizionalmente impiegati nel campo della cooperazione<sup>7</sup>, «*evidenziando la necessità di individuarne nuovi che fossero in grado di garantire una maggiore celerità nelle relazioni tra autorità giudiziarie*»<sup>8</sup>. Il principio del mutuo riconoscimento, proclamato quale pilastro della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'UE anche in materia penale<sup>9</sup>, rappresenta la «base

---

2010, disponibile in [http://aei.pitt.edu/32646/1/69\\_The\\_Area\\_of\\_Freedom,\\_Security\\_and\\_Justice\\_ten\\_years\\_on.pdf](http://aei.pitt.edu/32646/1/69_The_Area_of_Freedom,_Security_and_Justice_ten_years_on.pdf) (Ultimo accesso: 24 marzo 2023).

- 6 V. sito web ufficiale che mostra il quadro generale delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, nonché del ruolo svolto dal Parlamento Europeo, disponibile in <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/150/uno-spazio-di-liberta-sicurezza-e-giustizia-aspetti-generalis> (Ultimo accesso: 24 marzo 2023).
- 7 Al riguardo, BUJOSA VADELL, L., M., «Cooperación procesal internacional y prueba», in AA.VV. II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, *La prueba en proceso Evidence in the process*, Atelier, Barcelona, 2018, pp. 525-553.
- 8 V. Tesi di LAI, F., diretta dal Prof. CICERO, C., dalla Prof. ra CORTESI, F., e dal Prof. Dr. TINOCO PASTRANA A., Il contrasto alla criminalità transnazionale nell'Unione Europea. Atti di indagine e regime di acquisizione probatoria. Università degli studi di Cagliari, 2018, in particolare p. 45.
- 9 In particolare, nella conclusione n. 33 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999; testualmente: «Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità

giuridica» del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE)<sup>10</sup>, come affermato dall'articolo 67 comma 3 TFUE<sup>11</sup>.

Accanto a questo principio figura quello di armonizzazione legislativa<sup>12</sup>, da intendere nel senso dell'adozione di «norme minime» in materia processuale e penale in forma di Direttive<sup>13</sup>.

Dallo studio condotto emerge come la cooperazione giudiziaria in materia penale si sia evoluta. Dal meccanismo tradizionale, basato su una varietà di strumenti giuridici internazionali caratterizzati dalla richiesta di uno Stato ad un altro di fornire assistenza, tramite il canale diplomatico/ministeriale, si è passati a quello attuale, fondato sul rapporto diretto tra

---

giudiziarie». Testo disponibile in [https://www.europarl.europa.eu/summits/tam\\_es.htm](https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm) (Ultimo accesso: 23 marzo 2023).

- 10 Testualmente art. 67.1: «L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.», pubblicato in G.U. del 26 ottobre 2012, n. C 326 pp. 1-390.
- 11 Letteralmente: «L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.», di nuovo pubblicato in G.U. del 26 ottobre 2012, n. C 326 pp. 1-390. In particolare, JIMENO BULNES, M., «Problemas actuales del funcionamiento de detención y entrega», in MORENO CATENA V. M., ROMERO PRADAS M. I. (dres.), *Nuevos postulados de la cooperación judicial en la Unión Europea: libro homenaje a la Prof.<sup>a</sup> Isabel González Cano*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 385-432, specialmente p. 386.
- 12 A tal proposito, SCHROEDER, WERNER, LL. M., «Limits to European Harmonisation of Criminal Law», *Eucrim*, n. 2, 2020, pp. 144-148.
- 13 JIMENO BULNES, M., «El modelo de espacio judicial europeo en materia penal antes y después de Lisboa: ¿justicia versus seguridad o seguridad versus justicia?», in MARTÍN OSTOS, J. (coord.), *El derecho procesal en el Espacio Judicial Europeo – estudios dedicados al catedrático Faustino Gutiérrez-Alviz y Conradi*, Atelier, Barcelona, 2013, pp. 311-321, v. p. 314, (traduzione propria).



autorità giudiziarie o pubblici ministeri. Pertanto, la dizione «spazio giudiziario europeo» è una delle connotazioni giuridiche principali dell'UE, e rappresenta il portato della radicale innovazione costituzionale avvenuta con il Trattato di Maastricht<sup>14</sup> sull'UE<sup>15</sup>. In tale occasione, si rinuncia ad una prospettiva esclusivamente comunitaria della integrazione (comunitaria) «a vantaggio di una più comprensiva visione ordinamentale in cui coesistono tanto le Comunità europee quanto gli Stati membri ed una serie di forme di cooperazione intergovernativa, con criteri e procedure di esecuzione flessibili»<sup>16</sup>.

## 2. CONTESTO STORICO E ACCORDO DI SCHENGEN (1985)

La realizzazione di un SLSCG deriva da numerosi fattori e, tra questi, dalla costante e progressiva volontà di integrazione europea<sup>17</sup>. Nel 1950 il Ministro degli esteri francese Schuman rendeva una importante dichiarazione attraverso la quale rappresentava che «il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche (...) l'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto». Dalla «Dichiarazione

14 Pubblicato in G.U 29 luglio 1992, n. C 191, pp. 1-112.

15 CHITI, M. P., «Lo spazio giuridico europeo», in CHITI, M. P. (ed.), *Mutazioni del diritto pubblico nello spazio giuridico europeo*, Clueb, Bologna, 2003, pp. 1-10, così come LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, M., «La prueba en el Espacio Justicia. Evolución normativa», in LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, M. (ed.), *La orden europea de investigación y su incorporación al derecho español*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 15-52, specialmente p. 17.

16 CHITI, M. P., «Lo spazio giuridico europeo», *op. cit.*, p. 1.

17 Al rispetto, interessante punto di vista di GONZÁLEZ CANO, I., *Integración europea y justicia penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

Schuman» prese avvio la prima istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell'acciaio (di seguito CECA)<sup>18</sup> che prevedeva la creazione di un'area di libero scambio relativamente a tali settori.

La cosiddetta piccola Europa<sup>19</sup> perseguirà il suo processo d'integrazione<sup>20</sup> con la firma dei Trattati di Roma nel 1957<sup>21</sup>: il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (di seguito CEE)<sup>22</sup> e il Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (CEEA/EURATOM)<sup>23</sup>. Questi ul-

- 
- 18 Da parte di Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. In tal senso, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., «La creación de una nueva organización internacional: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero», *Ihering Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Sociales*, n. 1, 2018, pp. 45-73.
- 19 Ovvero, il complesso di Stati (27) che compongono l'UE. Diversa dalla «Grande Europa», con riferimento al Consiglio d'Europa; un'organizzazione internazionale la cui finalità è sostenere la democrazia, supportare i diritti umani e preservare l'identità culturale europea. Per un ulteriore approfondimento v. la pagina ufficiale del Consiglio d'Europa, disponibile in <https://www.coe.int/it/> (Ultimo accesso: 24 de marzo 2023).
- 20 Così, DE HOYOS SANCHO, M., *Criminal proceedings in the European Union: essential safeguards*, Lex Nova, Valladolid, 2008.
- 21 Al riguardo, PALOMEQUE LÓPEZ, M. C., «La Unión Europea a sesenta años de los Tratados de Roma», *Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales*, n. 33, 2017, pp. 11-14.
- 22 Da parte di: Francia, Germania, Italia e Paesi del Benelux, il successo determinò che Danimarca, Irlanda e Regno Unito furono i primi paesi aderenti. Nel 1973, si assiste al primo allargamento, da sei a nove membri. V. a proposito di integrazione, interessante punto di vista di ERJON, H., «L'allargamento dell'Unione Europea verso i balcani occidentali. Stabilità politica della regione oltre i criteri di Copenaghen», *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, n. 57, 2017, pp. 49-65.
- 23 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, pubblicato in G.U. del 23 dicembre 1957, n. 317. LEGGE

timi gettarono le basi per un graduale progresso economico o meglio, per uno spazio interno all'insegna di una maggiore flessibilità volta ad espandere il mercato. In seguito all'adesione alla Comunità di tre successivi Stati<sup>24</sup>, nel 1986 venne firmato l'Atto Unico Europeo (di seguito AUE): unico perché riuniva in un solo testo le disposizioni sulla modifica delle istituzioni europee e sull'ampliamento delle competenze comunitarie, nonché le disposizioni sulla cooperazione europea in materia di politica estera.

L'obiettivo principale coincideva con la realizzazione di un mercato unico senza frontiere. Ciò avrebbe consentito la scomparsa di ogni vincolo doganale con due principali conseguenze: la libera circolazione delle merci<sup>25</sup>, delle persone, dei servizi e dei capitali<sup>26</sup> che determinava a sua volta un effetto di ricaduta negativo, ovvero «*l'incremento della libera diffusione dei traffici illeciti e diffusione dei gruppi criminali organizzati*»<sup>27</sup>.

---

14 ottobre 1957, n. 1203, disponibile in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1957/12/23/057U1203/sg> (Ultimo accesso: 24 marzo 2023).

- 24 Grecia (nel 1981), Portogallo e Spagna (nel 1986). In particolare, per la Spagna, protagonista di questa tesi insieme all'Italia; ricordiamo che tra il 1975 e il 1978, si compì il processo di democratizzazione dopo duri anni (quarant'anni circa) di dittatura, con l'accettazione del *acquis communautaire*.
- 25 Per un quadro più dettagliato, la disciplina della libera circolazione delle merci all'interno dell'Ue è contenuta nel TFUE: gli artt. 28 e 30 vietano agli Stati membri i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tasse d'effetto equivalente; l'art. 110 vieta l'applicazione ai prodotti importati da altri Stati membri di imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche; gli artt. 34 e 35 vietano le restrizioni quantitative fra gli Stati membri tanto all'importazione quanto all'esportazione e le misure d'effetto equivalente; l'art. 36 consente, in via d'eccezione le restrizioni quantitative o le misure d'effetto equivalente giustificate da motivi d'interesse generale.
- 26 Inerente alla libera circolazione dei capitali e alla libera prestazione dei servizi, a titolo di esempio v. Sentenza della CGUE del 14 novembre 1995, *Peter Svensson and Lena Gustavsson C-484/93*, ECLI:EU:C:1995:379.
- 27 LONGO, F., «Identità, sicurezza, frontiere. I paradigmi della lotta alla criminalità organizzata nell'Unione Europea», *Meridiana*, n. 43, 2002, pp. 135-158, specialmente p. 136.

In tale quadro, si inseriscono l'Accordo di Schengen firmato nel 1985<sup>28</sup> relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni e, a completamento, la Convenzione di applicazione Schengen (firmato nel 1990)<sup>29</sup>. In relazione alla tematica in oggetto, l'articolo 9 dell'Accordo di Schengen prevede che «le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta alla criminalità (...). A tal fine, e nel rispetto delle proprie legislazioni interne, le Parti cercano di migliorare lo scambio di informazioni e di intensificarlo per quanto riguarda le informazioni che possano presentare un interesse per le altre Parti nella lotta alla criminalità». Si ricorda, in questo ambito, anche la creazione del Sistema d'informazione Schengen (SIS), successivamente progredito in S.I.S II, operativo dal 1995<sup>30</sup>, che ha contribuito a migliorare soprattutto la cooperazione di polizia<sup>31</sup>.

28 Da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi; per maggiori informazioni sulla tematica v. CORDERO ZÁRRAGA, E., «30 años del Acuerdo de Schengen», *Unión Europea Aranzadi*, n. 7, 2015, pp. 109-114.

29 Acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, pubblicato in G.U.U.E. del 22 settembre del 2000, n. L 239, pp. 19-62, disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A42000A0922%2802%29> (Ultimo accesso: 24 marzo 2023).

30 Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), pubblicato in G.U. del 7 agosto del 2007, n. 205, pp. 63-84.

31 LAI, F., *Il contrasto alla criminalità transnazionale nell'Unione Europea. Atti di indagine e regime di acquisizione probatoria*, op. cit., p. 41.

## 2.1. Trattato di Maastricht (1992)

Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio del 1992<sup>32</sup>, segna una tappa fondamentale nella costruzione dello spazio giudiziario europeo in materia penale, caratterizzata dalla struttura in tre pilastri. Il primo, inerente la dimensione comunitaria, disciplinato dalle disposizioni contenute nei trattati istitutivi delle Comunità europee; la missione di quest'ultima era quella di garantire «un buon funzionamento del mercato unico e, segnatamente, uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale e la parità tra uomini e donne»<sup>33</sup>. Il secondo pilastro, concernente la politica estera e di sicurezza comune (PESC)<sup>34</sup>, in concreto mirava al raggiungimento dell'integrità dell'UE conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite<sup>35</sup>. Il ter-

32 Da dodici paesi membri della CE (oggi Unione Europea), entrato in vigore il 1° novembre 1993. Lo stesso anno, le istituzioni dell'UE hanno avviato una serie di negoziati con i Paesi che avevo fatto richiesta di adesione, ovvero Austria, Finlandia, Svezia, e Norvegia. Nel 1994, è stato firmato l'atto di adesione e sottoposto alla ratifica degli Stati aderenti; in Norvegia la consultazione referendaria portò alla bocciatura. Dal 1° gennaio 1995, gli Stati membri sono passati da 12 a 15. Si ricorda, che il Trattato di Maastricht ha marcato lo sviluppo del processo d'integrazione monetaria, culminato nell'adozione di una moneta unica europea, l'euro. DANIELE, L., *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale. Ordinamento. Tutela giurisdizionale. Competenze*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 13, v. anche BÜNNING, L., *Die Konvergenzkriterien des Maastricht-Vertrages*, International Academic Publishing Group, Germania, 1997.

33 V. sito web ufficiale «Note tematiche sull'Unione europea – Parlamento Europeo», disponibile in <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/3/i-trattati-di-maastricht-e-di-amsterdam> (Ultimo accesso: il 19 ottobre 2021).

34 DANIELE, L., *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale. Ordinamento. Tutela giurisdizionale. Competenze*, op. cit., v. p. 14.

35 «Firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945»; documento disponibile in pdf [https://www.difesa.it/SMD\\_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso\\_Consigliere\\_Giuridico/Documents/26122\\_carta\\_ONU.pdf](https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/26122_carta_ONU.pdf) (Ultimo accesso: 23 marzo 2023).

zo pilastro<sup>36</sup>, relativo alla cooperazione nei settori della «giustizia e affari interni» (GAI), tenuto conto delle «*convenzioni del Consiglio d'Europa prevedeva l'emanazione di provvedimenti, vincolanti per gli Stati membri, in materia di estradizione e assistenza giudiziaria; inoltre, seppur ancora senza rinunciare al metodo intergovernativo, iniziano ad aversi i primi interventi e le dichiarazioni programmatiche funzionali al ravvicinamento e all'armonizzazione delle legislazioni nazionali, con particolare riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alle condotte di frode e corruzione in danno della stessa*»<sup>37</sup>.

I tre pilastri, benché distinti, erano funzionalmente legati tra di loro in modo da creare un sistema completo; ovvero un quadro istituzionale unico, con un ambito di applicazione preciso volto a disciplinare il ruolo degli Stati membri e a salvaguardarne il potere decisionale nei settori della politica estera e degli affari interni. In effetti, la necessità di creare tale terzo pilastro deriva dall'esigenza di mantenere il cosiddetto «metodo comunitario», quale espressione della sovranazionalità, separato dai settori di giustizia e affari interni. In particolare, le tecniche di regolamentazione utilizzate, coincidono con interventi congiunti da parte di magistrati di collegamento al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria o la rete giudiziaria europea. Questa tecnica, basata sullo scambio di informazioni, prevedeva la designazione da parte di ciascuno Stato membro, di uno o più punti di contatto allo scopo di esaminare le questioni che ostacolavano la cooperazione giudiziaria e di formulare proposte per la loro soluzione.

36 Sul terzo pilastro con carattere generale, GUTIÉRREZ CASTILLO, V. (dr.), «Espacio de seguridad, libertad y justicia» in SÁNCHEZ, V., M., *Derecho de la Unión Europea*, Huygens, Barcelona, 2010, pp. 257-264.

37 BARROCU, G., *La cooperazione investigativa in ambito europeo. Da Eurojust all'ordine d'indagine*, Cedam, Milano, 2017, in particolare p. 7. Inoltre, l'autore, ricorda nel suo manuale il Piano d'azione contro la criminalità organizzata (7421/97 - C4-0199/97), adottato durante il Consiglio europeo di Amsterdam del 1997, conformemente al mandato conferitogli dal Consiglio europeo di Dublino (1996).

In ultima analisi, il Trattato di Maastricht, ufficialmente denominato come anticipato, TUE, ha delineato le questioni relative alla cooperazione giudiziaria nelle politiche dell'Unione<sup>38</sup> e ha favorito un'evoluzione del cd. «percorso di europeizzazione»<sup>39</sup>.

## 2.2. Trattato di Amsterdam (1997)

Il Trattato di Amsterdam<sup>40</sup>, in conformità al Trattato di Maastricht, mantenne la struttura in pilastri stabilita da quest'ultimo, prevedendo una nuova rielaborazione<sup>41</sup>. Così, dei tre richiamati pilastri, alcune sezioni furono trasferite dal terzo pilastro al primo; si creò un nuovo Titolo IV nel trattato che istituisce la Comunità Europea rubricato: «Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone».

Con il Trattato di Amsterdam, la cooperazione giudiziaria e di polizia non era più intesa come funzionale ai controlli delle frontiere, ma divenne lo strumento fondamentale per la difesa dello spazio europeo<sup>42</sup>. A tal proposito, dal testo dello stesso Trattato emergono gli obiettivi: il Titolo VI inerente «le disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria

38 Sul punto, ORDÓÑEZ SOLIZ, D., «El espacio judicial de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea», *Revista de estudios políticos*, n. 119, 2003, pp. 1-15.

39 Più dettagliatamente, BARROCU, G., La cooperazione investigativa in ambito europeo. Da Eurojust all'ordine d'indagine, *op. cit.*, specialmente p. 7.

40 Pubblicata in G.U. del 10 novembre 1997, n. C 340, pp. 1-144.

41 DOMÍNGUEZ RUIZ, L., *La orden europea de investigación, Análisis legal y aplicaciones prácticas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, specialmente p. 21, (traduzione propria).

42 DARAIO, G., «La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo» in AA.VV. *Spazio europeo di giustizia e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, Torino Giappichelli, 2012, pp. 503-587, v. p. 511.

in materia penale», disciplina all'articolo K.2, l'azione comune nel settore della cooperazione di polizia (1.), prevedendo la valutazione di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata (d).

Il Consiglio promuoveva la cooperazione tramite Europol<sup>43</sup> e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, si impegnava ad adottare «misure che consentono ad Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata (b); promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol (c); ed istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale (d)».

L'aspetto ancor più interessante è contenuto nel Titolo VI *bis* che contiene le «Disposizioni su una cooperazione rafforzata»<sup>44</sup> nel quadro istituzionale dell'Unione: a condizione che venga utilizzata solo in ultima istanza; riguardi la maggioranza degli Stati membri; non pregiudichi l'*acquis* comunitario e le competenze, i diritti, gli obblighi e gli interessi degli Stati membri che non vi partecipano; sia aperta a tutti gli Stati membri

43 L'Ufficio europeo di polizia (Europol) è l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto. Concretamente, «aiuta le autorità nazionali a contrastare le forme gravi di criminalità internazionale e il terrorismo. Il suo obiettivo è contribuire a rendere l'Europa più sicura assistendo le autorità di contrasto negli Stati membri dell'UE» da quanto evince dalla pagina ufficiale disponibile in <https://www.europol.europa.eu/> (Ultimo accesso: 24 marzo 2023).

44 ELSÉN, C., «El espacio judicial europeo. Situación actual y perspectivas de futuro» in ARROYO ZAPATERO L., NIETO MARTÍN, A., (dres.), MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., (coord.), *El Derecho penal de la Unión Europea. Situación actual y perspectivas de futuro*, Ediciones de la Universidad de Castilla-LaMancha, Cuenca, 2007, specialmente p. 44.



e consenta loro di aderirvi in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito. In tale panorama, lo strumento adeguato a procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni penali all'interno dell'Unione, (nonostante v. sopra, l'azione comune appare nel testo dello stesso Trattato) è la Decisione quadro; con la previsione del carattere vincolante.

In ultima analisi si segnala il Piano d'azione contro la criminalità organizzata (adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997)<sup>45</sup> siglato lo stesso anno della firma del Trattato di Amsterdam. Occorre precisare che questo fu elaborato unicamente dal cosiddetto gruppo ad alto livello: da qui le critiche mosse dalla Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni che sottolineava come la mancata partecipazione del Parlamento Europeo o di un gruppo di lavoro del Consiglio fosse in contrasto con le disposizioni dell'articolo K.6, paragrafo 2, del TUE<sup>46</sup> (conformemente al Trattato di Amsterdam). Nella Risoluzione sul piano d'azione contro la criminalità

45 Pubblicato in G.U. del 15 agosto del 1997, n. C 251, pp. 1-18.

46 Testualmente: «2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:

- a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica;
- b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;
- c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione;

organizzata<sup>47</sup>, il Parlamento europeo ha affrontato aspetti essenziali che il Trattato di Lisbona avrebbe dovuto migliorare, di cui le lettere A, E, F e I; ed in parte lo farà, come analizzeremo nel paragrafo successivo.

### 2.3. Trattato di Lisbona (2007)

Il Trattato di Lisbona<sup>48</sup> aveva come obiettivo la riformulazione del «quadro istituzionale dell'UE, affinché potesse far fronte alle sfide dei nuovi allargamenti e dotare le istituzioni di procedure decisionali più efficaci»<sup>49</sup>. Nel 2003, attraverso una Convenzione venne presentato un progetto con l'intento di risolvere le questioni sul futuro dell'Unione; tale progetto portò alla firma di un Trattato (nel 2004) che istituiva una Costituzione europea volta a sostituire i trattati europei. In realtà, nonostante l'utilizzo del termine Costituzione, il testo si presentava come un nuovo Trattato con la medesima natura di quelli precedenti; ciò comportò una risposta negativa sia nella fase di ratifica<sup>50</sup> sia in quella successi-

- 
- d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio.

Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti.»

- 47 Pubblicato in G.U. del 8 dicembre 1997, n. C 371, p. 183.
- 48 Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, pubblicato in G.U. del 17 dicembre del 2007, n. C 306, pp. 1- 271.
- 49 Tra la bibliografia più recente, GENNUSA, M. E., NINATTI, S., TEGA, D., «La Carta vent'anni dopo Nizza», *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2020, pp. 623-626.
- 50 Da parte di Francia e Olanda nelle consultazioni referendarie. Per maggiori informazioni, CASSESE, S., «La Costituzione Europea», *Quaderni costituzionali*, n. 3, 1991, pp. 487-508.

va<sup>51</sup>. Difatti, il Consiglio Europeo<sup>52</sup> convocò una conferenza intergovernativa (CIG) per procedere ad una riformulazione dei trattati preesistenti abbandonando l'idea di un unico testo a livello costituzionale<sup>53</sup>.

Nel 2007, la CIG, a Bruxelles, elaborava un trattato di riforma (conosciuto come quello di Lisbona) che avrebbe modificato il Trattato di Maastricht, ovvero il TUE, e i Trattati di Roma<sup>54</sup>: il Trattato sul funzionamento dell'Unione<sup>55</sup>.

Il Trattato di Lisbona determina un'evoluzione normativa nell'UE, segnando il passaggio dalla decisione quadro alle direttive. Rispetto alle prime, è utile richiamare una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito CGUE)<sup>56</sup> nella quale si fa espressa menzione alla Decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001 (attualmente non in vigore)<sup>57</sup> relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale,

51 Nel Trattato costituzionale si riproduceva, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nel nuovo ci si limita ad affermare che «l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti» nella Carta, senza la riproduzione del suo testo.

52 Attualmente, «è l'istituzione dell'UE che definisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell'Unione europea», v. pagina ufficiale disponibile in <https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/>, dove è possibile vedere la composizione, ovvero i membri e le altre istituzioni europee, tra cui: Consiglio dell'Unione Europea, ed Eurogruppo. (Ultimo accesso: 24 marzo 2023).

53 DANIELE, L., *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale. Ordinamento. Tutela giurisdizionale. Competenze, op. cit.*, p. 16.

54 Ovvero, il Trattato che istituisce la Comunità Europea; v. par. 1.1.

55 ARMENTA DEU, T., «Europeización del proceso penal y derechos fundamentales: guía y condicionante» in MARTÍN OSTOS, J. (coord.), *El derecho procesal en el Espacio Judicial Europeo – estudios dedicados al catedrático Faustino Gutiérrez-Alviz y Conradi*, Atelier, Barcelona, 2013, pp. 67- 81, v. p. 70.

56 Sentenza della CGUE (grande sezione) del 16 giugno 2005, *Pupino* C-105/03, ECLI:EU:C:2005:386.

57 Decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, pubblicata in G.U. del 22 marzo 2001, n. 82,

adottata dall'UE nell'ambito del terzo pilastro, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale<sup>58</sup>. Tale decisione, obbliga gli Stati membri a provvedere, entro il termine, già allora scaduto, del 22 marzo 2002, a adeguare i corrispondenti ordinamenti a taluni principi di garanzia nei riguardi della vittima nel procedimento penale. Tra questi, il principio, contenuto nell'articolo 8 nella stessa decisione quadro, secondo cui, «ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base ad una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento».

---

pp. 1-4; è stata sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029> (Ultimo accesso: 23 marzo 2023).

- 58 In Italia, si avvia un procedimento nei riguardi di una maestra di scuola, «indagata per il reato di abuso di mezzi di correzione su minori». Durante il procedimento, «il PM vorrebbe sentire alcune vittime del reato ipotizzato» (in incidente probatorio) il codice italiano non contempla questa eventualità. Il GIP di Firenze, si preoccupa della conformità della normativa italiana, che ostacola la possibilità dell'incidente probatorio unicamente a reati nel contesto sessuale (art. 392 c.p.p.). Malgrado, la decisione quadro risultava non recepita nel sistema italiano, è attualmente in vigore; e manifesta «un principio di tutela delle vittime da reato che appare più ampio di quello che si ricava dai limiti della normativa nazionale sull'aspetto specifico della audizione protetta.» La Corte di Giustizia si esprime affermando che, le norme della decisione quadro (v. testo supra), devono essere intese in modo da consentire al giudice nazionale di poter concedere l'audizione ai bambini in età infantile che affermano di essere stati vittime. Così, VENEGONI, A., «La Corte di Giustizia gioca di nuovo un ruolo nella creazione del diritto penale europeo: il caso Pupino», *Magistratura indipendente*, 2017, disponibile in <https://www.magistraturaindipendente.it/la-corte-di-giustizia-gioca-di-nuovo-un-ruolo-nella-creazione-del-diritto-penale-europeo-i.htm> (Ultimo accesso: 23 marzo 2023).

«Il giudice a quo, di fronte alla maggiore ampiezza delle condizioni previste dalla decisione quadro rispetto alle norme di rito interne, domandava alla Corte se (e a quali condizioni) le seconde dovessero essere lette alla luce delle prime»<sup>59</sup>.

Nello specifico, si afferma l'obbligo di interpretazione conforme anche con riferimento agli atti del terzo pilastro, e per il carattere vincolante che contraddistingue le Decisioni quadro<sup>60</sup>. Come è stato osservato, «la Corte di Giustizia ha emesso una sorta di riconoscimento di primato della normativa europea in materia penale rispetto a quella interna»<sup>61</sup>.

Con l'abolizione dei pilastri, il Consiglio Europeo divenne una vera e propria istituzione, con un Presidente a capo dello stesso eletto per due

59 CHERUBINI F., «L'obbligo di interpretazione conforme «sconfina» nel terzo pilastro: note a margine della sentenza Pupino», *Vlex*, 2006, pp. 157-175, disponibile in <https://eu.vlex.com/> (Ultimo accesso: 23 marzo 2023).

60 Si precisa, la differenza: «l'obbligo di interpretazione conforme tra diritto internazionale e diritto comunitario» evidenziato da CHERUBINI. Molte delle corti nazionali, in conformità al principio *pacta sunt servanda*, fa ricorso all'obbligo di interpretazione conforme per evitare un conflitto tra norme interne e obblighi internazionali dello Stato. Nel caso in cui dalla norma, derivino molteplici interpretazioni, dovrà essere scelta «quella che consente il rispetto degli obblighi internazionali, dovendosi presumere la volontà dello Stato di assolverli». Per quanto concerne, il diritto comunitario, la Corte di Giustizia, ha affermato il primato e l'obbligo, da parte dei giudici nazionali di disapplicare la norma interna contrastante. Per garantire l'efficacia delle norme comunitarie, la Corte ha utilizzato il meccanismo dell'interpretazione conforme nella Sentenza *Von Colson* del 10 di aprile del 184 C 14/83, ECLI:EU:C:1984:153; CHERUBINI F., «L'obbligo di interpretazione conforme «sconfina» nel terzo pilastro: note a margine della sentenza Pupino», pp. 157-175.

61 VENEGONI, A., «La Corte di Giustizia gioca di nuovo un ruolo nella creazione del diritto penale europeo: il caso Pupino», *op. cit.* disponibile in <https://www.magistraturaindipendente.it/la-corte-di-giustizia-gioca-di-nuovo-un-ruolo-nella-creazione-del-diritto-penale-europeo-i.htm> (Ultimo accesso: 23 marzo 2023).

anni e mezzo; fu rafforzato anche il ruolo del Presidente della Commissione<sup>62</sup> ma la composizione di quest'ultima fu ridotta, così come quella del Parlamento europeo. Anche la menzionata CGUE ha visto aumentare i suoi poteri, soprattutto nell'ambito della cooperazione giudiziaria. Gli Stati europei riconoscono all'Unione competenze *in subiecta materia*, che viene, perciò, regolata nell'interlocuzione tra Parlamento e Consiglio: compaiono allora, atti con forma di direttiva, capaci di incidere su taluni aspetti del diritto sostanziale o di armonizzare certi settori dell'indagine o del giudizio penale<sup>63</sup>.

In ultimo, non per importanza, bisogna segnalare che il Trattato di Lisbona<sup>64</sup> «ha rafforzato la tutela dei diritti fondamentali all'interno del sistema europeo. Ai sensi dell'articolo 6.1 TUE, la Carta UE dei diritti fondamentali e i diritti ivi menzionati hanno assunto rango primario nel panorama delle fonti europee»<sup>65</sup>. Dalla tutela dei diritti fondamentali, anche all'interno dei singoli Stati membri, deriva la salvaguardia dello spazio giuridico europeo<sup>66</sup>.

- 
- 62 La Commissione europea è l'istituzione dell'UE «che detiene il monopolio dell'iniziativa legislativa e importanti poteri esecutivi in settori quali la concorrenza e il commercio esterno». Per maggiori informazioni v. link disponibile in [https://ec.europa.eu/info/index\\_it](https://ec.europa.eu/info/index_it) (Ultimo accesso: 24 marzo 2023).
- 63 TRAPPELLA, F., «Il provvedimento che attua la Convenzione di Bruxelles del 2000: una lunga gestazione e un destino incerto», *Processo Penale e Giustizia*, n. 1, 2018, pp 114-130, esp. p. 115.
- 64 Sulla tematica e per maggiori informazioni ÖBERG, J., «EU Procedural Criminal Law after Lisbon», in Ouwerkerk, J., Altena, J., Öberg, J., y Miettinen, S., *The future of EU Criminal Justice Policy and Practice*, Brill Nijhoff, Leiden, 2019, pp. 225-254.
- 65 CRESPI, S., «Diritti fondamentali, Corte di Giustizia e Riforma del Sistema UE di protezione dei dati», *Rivista italiana Diritto Pubblico Comunitario*, 2015, pp. 1-25, v. p. 5.
- 66 Così, GONZÁLEZ HERRERA, D., *El diálogo judicial en el espacio jurídico europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

### 3. CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO

I processi di globalizzazione hanno determinato un incontrollato trasferimento delle persone e dei beni: ciò ha avuto una notevole ricaduta sullo sviluppo e sulle interconnessioni fra le economie e i soggetti criminali dei vari paesi, accentuando il carattere sistemico delle relazioni tra le società e gli Stati<sup>67</sup>. Conseguenza di questo fenomeno è stato il superamento, nelle forme delinquenziali, della dimensione «individuale» e la diffusione di quella organizzazione-complessa, che, peraltro, si va sempre più strutturando, quanto a dinamiche operative, su schemi internazionali e transnazionali<sup>68</sup>.

La criminalità organizzata ha presagito le considerevoli possibilità «di locupletazione offerte dal mercato globale»<sup>69</sup> ed è persino mutata per trarne profitto: gruppi radicati in zone geografiche circoscritte hanno cominciato a «colonizzare» nuovi territori, a «contagiare» nuovi mercati; organizzazioni familistiche e verticistiche si sono trasformate in strutture più flessibili, reticolari, implicando, all'esigenza, nuove professionalità per compiere nuovi progetti criminali<sup>70</sup>.

«La spinta delle organizzazioni criminali alla ricerca, oltre frontiera, di nuovi mercati ed alleanze con gruppi criminali stranieri, fra l'altro, ha

67 Così, BARTONE, N., *Mandato di arresto Europeo e tipicità nazionale del reato*, Giuffrè, Milano, 2003, in particolare p. 4 e ss.

68 CACCIATORE, S., «Intervención de telecomunicaciones en la OEI, Adaptación en el contexto europeo y adaptación en España e Italia» in VILLAR FUENTES, I. M. (dra.), *Investigación y prueba en los procesos penales de España e Italia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 311-320, esp. p. 312 (traduzione propria).

69 BASILE, F., «Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo», *Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata*, 2019, pp.74-89, p. 75.

70 Ancora, BASILE, F., «Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo», *op. cit.*, in particolare p. 75.

accresciuto il rischio del c.d. *forum shopping* o *jurisdictional shopping*: cioè la scelta da parte delle organizzazioni criminali degli Stati dove (a causa dell'assenza di politiche criminali e legislative di contrasto efficaci) è meno rischioso compiere le attività illecite»<sup>71</sup>.

Appare evidente che le organizzazioni criminali con il trascorrere degli anni siano cambiate, a tal punto che si è parlato di «*mimetizzazione delle strutture criminali*»<sup>72</sup>; il tradizionale ambito delle attività criminose basato sul rapporto aggressore-vittima ha ceduto il posto alle nuove leggi dell'economia, ovvero alle occasioni di guadagno che offre la società. Queste si concretizzano principalmente nel traffico di stupefacenti, nella tratta degli esseri umani, nel contrabbando di sigarette e nel traffico illecito di beni culturali, archeologici, ambientali. La richiesta da parte del consumatore (ad esempio di stupefacenti di ogni genere) è aumentata e, di conseguenza, individuare in queste precise attività criminose la figura della vittima da parte delle forze di polizia risulta più difficile<sup>73</sup>.

71 Così, PONTI, C., «Il diritto internazionale e la criminalità organizzata», *Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata*, n. 1, 2015, pp. 23-36, p. 23.

72 LAUDATI, A., «I delitti transnazionali. Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all'interno dell'Unione europea», *Diritto Penale e Processo*, n. 4, 2006, pp. 401-405, p. 402.

73 LAUDATI, A., «I delitti transnazionali. Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all'interno dell'Unione europea», *op. cit.*, p. 402. Dalla prospettiva italiana, si riporta un esempio concreto di commercio illegale. La criminalità organizzata pone interesse alle opere d'arte, in quanto nell'ipotesi concreta di un soggetto in possesso di una moneta di valore, è difficilmente ravvisabile la provenienza, lo stato di conservazione e l'effettivo valore di tale moneta. In quanto le forze dell'ordine, si limiteranno a sequestrare la moneta, il referto da lui compiuto verrà trasmesso al pubblico ministero. Il tempo trascorso per la ricettazione (articolo 648 c.p.) e il patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) sarà stato tanto e utile da consentire un grande guadagno.



Dinnanzi ad un quadro simile, è necessario rispondere con un'azione «preventivo-repressiva»<sup>74</sup> che dovrebbe muoversi secondo due direttive da una parte, attraverso l'armonizzazione delle discipline nazionali o, quantomeno, una riduzione delle «distanze» che intercorrono tra le legislazioni di ogni Stato membro; dall'altra, attraverso il potenziamento del processo di cooperazione che coinvolga anche gli organi investigativi oltre che le autorità giudiziarie, di polizia e persino quelle amministrative<sup>75</sup>.

### 3.1. La cooperazione giudiziaria in materia penale

Come si è anticipato, dal TUE si inizia ad intravedere il germe di quella cooperazione auspicata dagli Stati membri, che sarà poi, oggetto di dibattito dalla dottrina fino a divenire il fondamento dello SLSCG.

Ai sensi del TFUE, i provvedimenti in tema di cooperazione sono adottati in conformità alla procedura legislativa ordinaria e sono sottoposti al controllo giurisdizionale della CGUE<sup>76</sup>. Gli articoli da 82 a 86 del TFUE costituiscono la base giuridica della cooperazione giudiziaria in materia penale. In particolare, l'articolo 82 TFUE disciplina quest'ultima e «include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», agevolando i rapporti tra le autorità, «ciascuna delle quali agisce nell'ambito delle proprie prerogative nazionali»<sup>77</sup>.

74 BASILE, F., «Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo», *op. cit.*, p. 76.

75 BASILE, F., «Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo», *op. cit.*, p. 77.

76 In termini critici, DAVOLI, A., «Cooperazione giudiziaria in materia penale», *Note tematiche sull'Unione europea Parlamento Europeo*, 2021, disponibile in <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/155/cooperazione-giudiziaria-in-materia-penale> (Ultimo accesso: 23 marzo 2023).

77 LAI, F., *Il contrasto alla criminalità transnazionale nell'Unione Europea. Atti di indagine e regime di acquisizione probatoria*, *op. cit.*, p. 72.

Relativamente alla procedura con cui si concretizza la cooperazione giudiziaria, il modello europeo si libera «dall'accezione debole di cooperazione, in quanto non si limita alla tradizionale collaborazione funzionale e operativa fra le autorità giudiziarie»<sup>78</sup>, destinata essenzialmente al coordinamento delle giurisdizioni nazionali, ma si estende all'armonizzazione delle normative nazionali.

A questo punto, è opportuno accennare a due importanti organi, sia pure profondamente diversi tra loro, ma che rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito della cooperazione giudiziaria. Eurojust<sup>79</sup>, l'organismo indipendente dell'UE incaricato di «indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE»<sup>80</sup> e la sua evoluzione, rappresentata dalla neonata Procura Europea<sup>81</sup>.

Da un lato, l'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)<sup>82</sup> ha rappresentato la prosecuzione del percorso iniziato dopo Tampere per la realizzazione di uno spazio di giustizia europeo<sup>83</sup> destina-

78 PELLEGRINO, M., «Cooperazione giudiziaria penale nell'UE», *op. cit.*, p. 16

79 Pagina ufficiale disponibile in <https://www.eurojust.europa.eu/> (Ultimo accesso: 23 marzo 2023).

80 V. pagina web del Consiglio Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, disponibile in [https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eppo/#:~:text=La%20Procura%20europea%20\(EPPO\)%20%C3%A8,corruzione](https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eppo/#:~:text=La%20Procura%20europea%20(EPPO)%20%C3%A8,corruzione) (Ultimo accesso: 23 marzo 2023).

81 Sull'argomento, PLANCHADELL GARGALLO, A., «Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (BOE del 2 de julio)», *Revista de derecho y proceso penal*, n. 63, 2021, pp. 207-222.

82 Sul fronte italiano, v. ZANETTI, E., *Eurojust e l'ordinamento italiano*, Giuffré, Milano, 2006.

83 Di interesse, sulla tematica, VERVAELE, J. A.E., «El espacio de libertad, seguridad y justicia: ¿Hacia una protección equivalente de las partes/participantes en el proceso penal», in. DE HOYOS, M. (Dir.), *Garantías y derechos de las víctimas*

to a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale. Eurojust si occupa di indagini connesse a casi transnazionali in materia di criminalità grave e organizzata, con il compito di offrire specifiche unità operative, ovvero di intervenire come «mediatore» tra le autorità degli Stati membri, facilitando la cooperazione e il coordinamento nell'ambito delle indagini parallele che si svolgono in diversi Stati membri.

Dall'altro, la creazione dell'EPPO<sup>84</sup>, sottintende una vera strategia europea nella tutela degli interessi finanziari dell'UE. L'obiettivo principale, come stabilito dall'articolo 86 del TFUE, è quello di indagare e perseguire gli autori di reati che pregiudicano «gli interessi finanziari dell'Unione dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti e secondo le regole processuali di questi ultimi»<sup>85</sup>. La Procura Europea è competente per i reati elencati nella Direttiva 2017/1371/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 sulla lotta contro la frode<sup>86</sup> che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante

---

*especialmente vulnerables en el marco jurídico de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 15-30.

- 84 Sul tema, FALETTI, F., «The European Public Prosecutor's Office and the Principle of Equality», *Eucrim*, n. 1, 2017, pp. 25-26.
- 85 Il secondo comma del citato articolo 86 inoltre, prevede, la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata con almeno nove Stati membri; quest'ultima sarà concessa, sulla base della sola approvazione del Parlamento Europeo. Tuttavia, l'articolo 86 del TFUE tace sulla competenza *ratione materiae* dell'EPPO, in quanto contiene un limitato riferimento ad un mandato «di base» per combattere la criminalità che colpisce gli interessi finanziari dell'UE o, dopo una decisione unanime del Consiglio, a un mandato esteso per combattere i crimini gravi che hanno una dimensione transfrontaliera. Al riguardo, SALAZAR, L., «Definitivamente approvato il regolamento istitutivo della procura europea (EPPO)», *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 10, 2017, pp. 328- 338, v. p. 330.
- 86 JIMENO BULNES, M., «La estrategia de la cooperación judicial penal europea en materia de interes financieros», in GÓMEZ DE LA TORRE I. B. E RODRÍGUEZ-GARCÍA N. (eds.), *Decomiso y recuperación de activos crime doesn't*

il diritto penale<sup>87</sup> (c.d. Direttiva PIF)<sup>88</sup>. Tutti i cittadini dell'UE e non solo, nel momento in cui hanno fondati motivi per sospettare che sia stato commesso un reato contro gli interessi finanziari dell'UE, possono denunciare un reato all'EPPO. Si dovrà poi valutare se i reati rientrano nella competenza materiale dell'EPPO, sulla base delle norme contenute nel Regolamento 2017/1939 che ne disciplina organizzazione e funzionamento.

#### 4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La politica criminale dell'Unione europea contro la criminalità organizzata ha subito un'evoluzione derivante da un lato, dalla necessità di elaborare un processo di «unificazione» di diverse visioni e sistemi di interessi tra gli Stati membri e, dall'altro, dall'esigenza di individuare un unico paradigma basato sulla sicurezza. L'espressione «spazio giudiziario europeo» è quindi una delle principali connotazioni giuridiche dell'UE e rappresenta il risultato della radicale innovazione costituzionale avvenuta con il Trattato di Maastricht sull'UE.

La lotta contro il crimine organizzato è fondamentale al fine di limitare la prevedibile minaccia e i danni contro gli Stati di diritto. La capacità di queste fenomenologie criminali di proiettarsi in diverse realtà nazionali rappresenta infatti un fattore agevolatore del crimine organizzato tant'è che «*la necessità di una trattazione unitaria di questi fenomeni con mi-*

---

pay, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp.1-28, in particolare p. 28 (traduzione propria).

87 Pubblicata nella G. U. del 28 luglio del 2017, L 198/29, pp. 29-41.

88 GUERRERO PALOMARES, S., «La protección de los intereses financieros de la UE a través de la Directiva PIF y de la creación de la Fiscalía Europea», in SUÁREZ XAVIER, R. Y. FONTESTAD PORTÁLES, L. (dres.), «*Seguridad y los retos de la jurisdicción en el siglo XXI: Justicia, Sostenibilidad y Paz*», Colex, A Coruña, 2022, pp. 75-98.

sure maggiormente capaci di influenzare le singole legislazioni nazionali in materia trova conferma come abbiamo visto, anche nel Trattato di Lisbona (...)»<sup>89</sup>.

## 5. BIBLIOGRAFÍA

- ARMENTA DEU, T., «Europeización del proceso penal y derechos fundamentales: guía y condicionante» in J. Martín Ostos (coord.), *El derecho procesal en el Espacio Judicial Europeo - estudios dedicados al catedrático Faustino Gutiérrez-Alviz y Conradi*, Atelier, Barcelona, 2013, pp. 67- 81
- BARTONE, N., *Mandato di arresto Europeo e tipicità nazionale del reato*, Giuffré, Milano, 2003.
- BARROCU, G., *La cooperazione investigativa in ambito europeo. Da Eurojust all'ordine d'indagine*, Cedam, Milano, 2017.
- BASILE, F., «Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo», *Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata*, 2019, pp.74-89.
- BUJOSA VADELL, L., M., «Cooperación procesal internacional y prueba», in AA.VV. II Conferencia Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, *La prueba en proceso Evidence in the process*, Atelier, Barcelona, 2018, pp. 525-553.
- BÜNNING, L., *Die Konvergenzkriterien des Maastricht-Vertrages*, International Academic Publishing Group, Germania, 1997.
- CACCIATORE, S., «Intervención de telecomunicaciones en la OEI, Adaptación en el contexto europeo y adaptación en España e Italia» en

<sup>89</sup> MAGGIO, Paola, «La lotta alla criminalità in Europea organizzata in Europa fra strategie di contrasto e rispetto dei diritti umani», *Cassazione Penale*, n. 2, 2013, pp. 808-821, v. p. 810.

- VILLAR FUENTES, I. M (dra.), *Investigación y prueba en los procesos penales de España e Italia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 311-320.
- CASSESE, S., «La Costituzione Europea», *Quaderni costituzionali*. n. 3, 1991, pp. 487-508.
- CHERUBINI F., «L'obbligo di interpretazione conforme «sconfina» nel terzo pilastro: note a margine della sentenza Pupino», *Vlex*, 2006, pp. 157-175, <https://eu.vlex.com/>
- CHITI, M. P., «Lo spazio giuridico europeo», in M. P. Chiti (ed.), *Mutazioni del diritto pubblico nello spazio giuridico europeo*, Clueb, Bologna, 2003, pp. 1-10.
- CORDERO ZÁRRAGA, E., «30 años del Acuerdo de Schengen», *Unión Europea Aranzadi*, n. 7, 2015, pp. 109-114.
- CRESPI, S., «Diritti fondamentali, Corte di Giustizia e Riforma del Sistema UE di protezione dei dati», *Rivista italiana Diritto Pubblico Comunitario*, 2015, pp. 1-25.
- DANIELE, L., *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale. Ordinamento. Tutela giurisdizionale. Competenze*, Giuffrè, Milano, 2020.
- DARAIIO, G., «La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo» in AA.VV. *Spazio europeo di giustizia e procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, Torino Giappichelli, 2012, pp. 503-587.
- DAVOLI, A., «Cooperazione giudiziaria in materia penale», *Note tematiche sull'Unione europea Parlamento Europeo*, 2021, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/155/cooperazione-giudiziaria-in-materia-penale>
- DE HOYOS SANCHO, M., *Criminal proceedings in the European Union: essential safeguards*, Lex Nova, Valladolid, 2008.
- DOMÍNGUEZ RUIZ, L., *La orden europea de investigación, Análisis legal y aplicaciones prácticas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

- ELSEN, C., «El espacio judicial europeo. Situación actual y perspectivas de futuro» in ARROYO ZAPATERO, L., NIETO MARTÍN A., (dres.), M., Muñoz De Morales Romero (coord.), *El Derecho penal de la Unión Europea. Situación actual y perspectivas de futuro*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2007.
- ERJON, H., «L'allargamento dell'Unione Europea verso i balcani occidentali. Stabilità politica della regione oltre i criteri di Copenaghen», *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, n. 57, 2017, pp. 49-65.
- FALETTI, F., «The European Public Prosecutor's Office and the Principle of Equality», *Eucrim*, n. 1, 2017, pp. 25-26.
- FAGGIANI, V., «Le direttive sui diritti processuali verso un «modello europeo di giustizia penale»?», *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 1, 2017, pp. 84-103.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., «La creación de una nueva organización internacional: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero», *Ihering Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Sociales*, n. 1, 2018, pp. 45-73.
- GENNUSA, M. E., NINATTI, S., TEGA, D., «La Carta vent'anni dopo Nizza», *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2020, pp. 623-626.
- GONZÁLEZ CANO, I., *Integración europea y justicia penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- GONZÁLEZ HERRERA, D., *El diálogo judicial en el espacio jurídico europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.
- GUERRERO PALOMARES, S., «La protección de los intereses financieros de la UE a través de la Directiva PIF y de la creación de la Fiscalía Europea», en SUÁREZ XAVIER, R. Y FONTESTAD PORTÁLES, L. (dres.), «Seguridad y los retos de la jurisdicción en el siglo XXI: Justicia, Sostenibilidad y Paz», Colex, A Coruña, 2022, pp. 75-98.
- GUILD, E., CARRERA, S., EGGENSCHWILER, A. (eds.), *The area of freedom, security and justice ten years on successes and future chal-*

- lenges under the stockholm programme*, Centre for european policy studies Brussels, Brussels, 2010.
- GUTIÉRREZ CASTILLO, V., (dr.), «Espacio de seguridad, libertad y justicia» in SÁNCHEZ, V., M., *Derecho de la Unión Europea*, Huygens, Barcelona, 2010, pp. 257-264.
- GUTIÉRREZ CASTILLO, V., y LÓPEZ J., M. (eds.), «El desarrollo y consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea», Tecnos, Madrid, 2016.
- JIMENO BULNES, M., «El modelo de espacio judicial europeo en materia penal antes y después de Lisboa: ¿justicia versus seguridad o seguridad versus justicia?», in Martín Ostos, J. (coord.), *El derecho procesal en el Espacio Judicial Europeo - estudios dedicados al catedrático Faustino Gutiérrez-Alviz y Conradi*, Atelier, Barcelona, 2013, pp. 311-321.
- JIMENO BULNES, M., «La estrategia de la cooperación judicial penal europea en materia de interes financieros», in GÓMEZ DE LA TORRE, I. B., E RODRÍGUEZ-GARCÍA, N., (eds.), *Decomiso y recuperación de activos crime doesn't pay*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp.1-28.
- JIMENO BULNES, M., «Problemas actuales del funcionamiento de detención y entrega», in MORENO CATENA, V. M., ROMERO PRADAS M. I., (dres.), *Nuevos postulados de la cooperación judicial en la Unión Europea: libro homenaje a la Prof.ª Isabel González Cano*, Tirant lo Blanch, Valencia 2021, pp. 385-432.
- KOSTORIS, R. E., «Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno», *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3, 2015, pp. 1177-1204.
- LAI, E., *Il contrasto alla criminalità transnazionale nell'Unione Europea. Atti di indagine e regime di acquisizione probatoria*, Università degli studi di Cagliari, Cagliari, 2018, <https://idus.us.es/handle/11441/74756>
- LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, M., «La prueba en el Espacio Justicia. Evolución normativa», in LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA M.



- (ed.), *La orden europea de investigación y su incorporación al derecho español*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 15-52.
- LONGO, F., «Identità, sicurezza, frontiere. I paradigmi della lotta alla criminalità organizzata nell'Unione Europea», *Meridiana*, n. 43, 2002, pp. 135-158.
- MAGGIO, P., «La lotta alla criminalità in Europea organizzata in Europa fra strategie di contrasto e rispetto dei diritti umani», *Cassazione Penale*, n. 2, 2013, pp. 808-821.
- ÖBERG, J., «EU Procedural Criminal Law after Lisbon», in OUWERKEK, J., ALTENA, J., ÖBERG J., Y MIETTINEN S., *The future of EU Criminal Justice Policy and Practice*, Brill Nijhoff, Leiden, 2019, pp. 225-254.
- ORDÓÑEZ SOLIZ, D., «El espacio judicial de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea», *Revista de estudios políticos* 2003, n. 119, pp. 1-15.
- PALOMEQUE LÓPEZ, M. C., «La Unión Europea a sesenta años de los Tratados de Roma», *Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales*, n. 33, 2017, pp. 11-14.
- PLANCHADELL GARGALLO, A., «Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (BOE del 2 de julio)», *Revista de derecho y proceso penal*, n. 63, 2021, pp. 207-222.
- REMOTTI CARBONELL, J. C., «El proceso de formación del Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. La lucha contra la delincuencia, cooperación policial y judicial y garantías del debido proceso en el ámbito penal» in FREIXES, T. (coord.), *Garantías del Proceso Debido y Unión Europea*, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2020, pp. 21-66.
- SALAZAR, L., «Definitivamente approvato il regolamento istitutivo della procura europea (EPPO)», *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 10, 2017, pp. 328- 338.

SCHROEDER, WERNER, LL. M., «Limits to European Harmonisation of Criminal Law», *Eucrim*, n. 2, 2020, pp. 144-148.

TRAPPELLA, F., «Il provvedimento che attua la Convenzione di Bruxelles del 2000: una lunga gestazione e un destino incerto», *Processo Penale e Giustizia*, n. 1, 2018, pp 114-130.

VENEGONI, A., «La Corte di Giustizia gioca di nuovo un ruolo nella creazione del diritto penale europeo: il caso Pupino», *Magistratura indipendente*, 2017, <https://www.magistraturaindipendente.it/la-corte-di-giustizia-gioca-di-nuovo-un-ruolo-nella-creazione-del-diritto-penale-europeo-i.htm>

VERVAELE, J. A.E, «El espacio de libertad, seguridad y justicia: ¿Hacia una protección equivalente de las partes/participantes en el proceso penal», en DE HOYOS, M. (Dir.), *Garantías y derechos de las víctimas especialmente vulnerables en el marco jurídico de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 15-30.